

La desgastada y fina línea azul

El papel fundamental del servicio policial no es la prevención de la delincuencia en sí. La policía se considera, más bien, un «elemento de contención», una fina línea azul que se interpone entre los miembros de la sociedad que respetan la ley y los delincuentes que intentan aprovecharse de los primeros.

—William H. Parker, *Surveillance by Wiretap or Dictograph: Threat or Protection? A Police Chief's Opinion* (1954)

Desde mi punto de vista, toda la gente se cree negra hoy en día: nuestros debates nacionales están provocando que todas las personas se sientan negras [...] y por eso, cuando oyen el término de «Black Lives Matter», en realidad escuchan que son sus vidas las que importan.

— Eric Adams, presidente del Distrito de Brooklyn y antiguo capitán del Departamento de Policía de Nueva York (6 de junio de 2020)

El cuerpo político de George Floyd

De pie sobre los escombros de un edificio bombardeado en Idlib, el artista sirio Aziz al-Asmar pintó un audaz fresco en una columna que se erguía solitaria: las consignas «no al racismo» y «no puedo respirar» envolvían como un halo el rostro de George Floyd, un hombre

afroestadounidense de 46 años que había sido estrangulado hasta la muerte por la policía de Mineápolis a finales de mayo de 2020. Cuando Asmar vio el vídeo viral del asesinato de Floyd y escuchó sus ruegos de misericordia, recordó las súplicas de los civiles moribundos que el presidente sirio Bashar al-Ásad había atacado con gas sarín tres años antes en el oeste de Guta. A seis mil millas de distancia –casi diez mil kilómetros–, manifestantes en Mineápolis incendiaban la comisaría del Tercer Precinto de Policía, hogar de los cuatro agentes que habían detenido a Floyd. Luego fueron a incendiar una tienda de Target, otra de AutoZone y algunos negocios cercanos más: en total, se reportaron daños en unos 220 edificios solo en esta ciudad. El apoyo a las protestas era amplio, contrario a la línea editorial de los medios corporativos que intentaban oponer a ciudadanos pacíficos y respetuosos con la ley contra una supuesta multitud ilegal de saqueadores, anarquistas y agitadores externos. Cuando el empresario Don Flesch inspeccionó el almacén carbonizado de su tienda de Central Camera después de una noche de incendios y saqueos que había asolado el centro de Chicago, no guardaba rencor alguno hacia los manifestantes: «Me molesta que la gente no se haya quedado con Black Lives Matter», dijo, «porque por eso empezó todo esto»¹. Millones de personas salieron a la calle en pacíficas marchas y vigiliás hasta abarrotar parques y plazas públicas en los cincuenta estados de los EE. UU., desde las ciudades más grandes del país hasta pequeños pueblos de todas las regiones. El asesinato policial de Floyd fue visto como el renacimiento de un movimiento latente que produjo lo que algunos consideran la mayor oleada de protestas masivas en la historia de los EE. UU.².

Los jefes policiales de algunas ciudades se unieron a los manifestantes, cogidos del brazo y, en ciertos casos, incluso «arrodillándose»

1. Elejalde-Ruiz, A. (31 de mayo de 2020), «Central Camera, Iconic Loop Business for 121 Years, Vows to Rebuild as Building Burns during Unrest over George Floyd's Death», *Chicago Tribune*.
2. Shanahan, J. y Kurti, Z. (julio-agosto de 2020), «Prelude to a Hot American Summer», *Brooklyn Rail*; Buchanan, L., Bui, Q. y Patel, J. K. (3 de julio de 2020), «Black Lives Matter May Be the Largest Movement in US History», *New York Times*; Pries, A. (2 de junio de 2020), «These Are All the Cities Where Protests and Riots Have Erupted over George Floyd's Death», *NJ.com*.

al estilo de la protesta de Colin Kaepernick, el *quarterback* de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), años antes. En otras ciudades, los pacíficos manifestantes se enfrentaron noche tras noche a brigadas de policías antidisturbios, con nubes de gas lacrimógeno, lluvias de balas de goma y gritos que llenaban el aire allí dondequiera que se habían aplicado estrictos toques de queda. Otras veces, las pacíficas asambleas fueron interrumpidas por una milicia de contramanifestantes con chalecos antibalas y fusiles de asalto que acechaban las calles e intimidaban a los manifestantes desarmados. El poder policial en ciudades como Chicago y Nueva York fue contrarrestado en ocasiones con improvisadas e intrépidas maniobras, como cuando los rebeldes incendiaban coches patrulla y construían barricadas con contenedores de basura y cajas de periódicos que flanqueaban a la policía y frustraban sus intentos de represión por encapsulamiento y demás tácticas antidisturbios. Manuales que detallaban estrategias para confrontar este poder policial circulaban por redes sociales y redes de activistas. En cierto momento, incluso parecía que los rebeldes llegarían a imponerse: la policía de Atlanta, por ejemplo, se tuvo que plantar en el primer piso de la sede de la CNN frente a una muchedumbre envalentonada que amenazaba con tomar el edificio³, una escena que se repitió en todo el país durante semanas. Esta rebelión se apoderó de la conciencia de la nación y del mundo entero. Madera quemada y gas pimienta se mezclaban con el optimismo, la adrenalina y los cánticos de desafío: era como si la revolución estuviese en el aire.

La energía de las protestas pronto se trasladó al mundo del deporte profesional. Una docena de jugadores de la NFL subió a Internet un corto vídeo en el que expresaba su apoyo a Black Lives Matter (BLM) y exigía a los jefes de la Liga que demostrasen su compromiso antirracista. Un día después, Roger Goodell, comisario de la NFL, hizo exactamente eso en su propio vídeo. Cuando la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) reanudó su temporada a mediados de verano, tras haber sido suspendida por la pandemia de coronavirus,

3. Alphonso III, F. (29 de mayo de 2020), «CNN Center in Atlanta Damaged during Protests», *CNN*.

los jugadores lucieron camisetas con mensajes de BLM, tales como «pronunciad sus nombres», «paz», «soy un ser humano», «escuchadnos» y «soy aliado». Además, después de los disparos de la policía contra Jacob Blake en Kenosha (Wisconsin) en agosto, los jugadores de la NBA organizaron una especie de huelga salvaje por la que retrasaron los partidos de eliminatorias con el objetivo de negociar con la Liga una respuesta adecuada a los eventos recientes.

Las protestas masivas fueron más allá del problema inmediato de la violencia policial y muchas manifestaciones apuntaron a los símbolos de la supremacía blanca. En Nueva Orleans, la multitud derribó el busto del esclavista John McDonough y lo tiró al río Misisipi. Al otro lado del Atlántico, en Inglaterra, unos activistas hicieron lo mismo con la estatua de Edward Colston, traficante de esclavos: la arrojaron al puerto de Bristol y, en su lugar, erigieron una nueva estatua de Jen Reid, activista negra de la localidad, con el puño en alto en señal del Poder Negro o Black Power. En la Avenida del Monumento de Richmond (Virginia), donde los activistas exigían desde hacía tiempo la retirada de unas estatuas confederadas, los manifestantes garabatearon «ACAB» y «que le follen a la policía» en sus pedestales. Así, transformaron la vía pública en una celebración de la multiracialidad de los EE. UU. que contrastaba claramente con el mundo de esclavitud étnica por el que lucharon J. E. B. Stuart y Robert E. Lee. De vuelta a las Ciudades Gemelas, el área metropolitana de Minnesota, activistas energizados por el momento, bajo el liderazgo de los organizadores del Movimiento Indígena Estadounidense, derribaron una estatua de Cristóbal Colón de diez pies de altura –poco más de tres metros– frente al capitolio estatal en Saint Paul.

Por un momento, parecía haber comenzado una guerra por la ciudad y la nación. En las semanas posteriores al asesinato de Floyd, activistas de Mineápolis levantaron barricadas en las inmediaciones de la intersección entre la Calle 38 y la Avenida de Chicago, y convirtieron el área, declarada más tarde como la Plaza George Floyd, en una zona vedada a la policía. Después de que los agentes renunciasen al control de la comisaría del Precinto Este de Seattle, los activistas ocuparon por poco tiempo seis manzanas de la ciudad –la

Zona Autónoma de la Colina del Capitolio, luego rebautizada como CHOP, *Capitol Hill Occupied Protest*— e iniciaron un experimento social de vida más allá de la vigilancia policial: una «nueva sociedad de protesta» al completo, con un huerto comunitario y una «cooperativa sin policía»⁴. El jefe de policía de Seattle defendió el abandono temporal de la zona como un «ejercicio de confianza» destinado a intentar desescalar las protestas. El presidente Donald Trump condenó estas acciones, acusó a los líderes de Seattle de haber perdido el control de la ciudad y los pintó como políticos débiles. Sin embargo, en medio de acaloradas protestas cerca de la Casa Blanca, Trump se refugió en un búnker subterráneo, solo para reaparecer días después y montar un espectáculo protofascista: desplegó a las fuerzas federales para expulsar a los manifestantes pacíficos del Parque Lafayette y despejó la calle con armamento químico para poder caminar hasta una iglesia cercana y hacerse una sesión de fotografía. La alcaldesa de Washington D. C., Muriel Bowser, saltó a la refriega y encargó un mural callejero en el que unos artistas pintaron «Black Lives Matter» en letras amarillas brillantes sobre la Calle 16, justo al norte de la Casa Blanca. Más tarde, los artistas de la guerrilla añadieron al mural un «desfinanciad a la policía», resignificando el aval oficial por medio de esta lúdica rebelión.

A lo largo del verano y hasta el otoño, las manifestaciones abarcaron toda una gama de emociones, desde el duelo colectivo y las noches de rabia, incendio y saqueo, hasta momentos de goce y exuberancia pura. Después de que los saqueos provocasen acciones de «justicieros» y se usase a los barrios negros y latinos de Chicago como chivos expiatorios racistas, y de que algunos residentes armados atacasen a automovilistas y a cualquiera sospechoso de ser saqueador, los organizadores negociaron una tregua y llenaron las calles de marchas y concentraciones de solidaridad interracial⁵. En septiembre, Adam Hollingsworth, el «vaquero de las rastas», cabalgó siete millas —unos

4. Golden, H. (11 de junio de 2020), «Seattle Protestors Take Over City Blocks to Create Police-Free “Autonomous Zone”», *Guardian*.

5. Serrato, J. (9 de julio de 2020), «Abandoned Communities Arrange Black and Brown Truce», *South Side Weekly*.

once kilómetros— sobre NuNu, su yegua pinta, por la autopista Dan Ryan y a través del sur de Chicago, flanqueado por una escolta de motoristas. Con la esperanza de llamar la atención sobre la violencia contra las infancias negras de su ciudad natal, Hollingsworth paralizó el tráfico en hora punta y se ganó los vítores de seguidores y simpatizantes⁶. La policía lo arrestó por delitos menores de conducta imprudente y allanamiento de morada y un delito grave de crueldad animal. Hollingsworth se unió a los miles de manifestantes que abarrotaron las cárceles del país durante los meses de verano: en la primera semana tras la muerte de George Floyd, más de 11.000 personas fueron arrestadas, 2.700 solo en Los Ángeles. Esto era algo distinto a los «largos y calurosos veranos» de la década de los sesenta, cuando las rebeliones de los guetos arrasaron la mayoría de las grandes ciudades estadounidenses: esto era algo más amplio, en constante combustión, intermitentemente explosivo e incontrolable, más parecido a los incendios forestales que devastaron el oeste de los EE. UU. en el verano y otoño de 2020. A lo largo de ese verano, las expresiones de solidaridad y condena a la brutalidad policial fueron ubicuas y permearon la conciencia pública: en los escaparates de las tiendas, en carteles publicitarios... Millones de estadounidenses abrazaron por fin la premisa básica de los activistas de Black Lives Matter: que el aparato carcelario estadounidense ataca de manera desproporcionada a la población negra, a menudo con una fuerza letal e injustificada.

En vida, Floyd fue un hombre negro de clase trabajadora que vivió en relativa oscuridad. Con su muerte, se convirtió en un símbolo internacional de la violencia racial, pero también en un avatar del descontento social más amplio que estaba definiendo a los EE. UU. bajo el mandato de Trump. Floyd, oriundo de Houston, era querido por su familia, amigos y antiguos compañeros de fútbol y baloncesto del instituto Jack Yates, quienes lo llamaban «Perry» y «Big Floyd». De niño soñaba con ser policía o juez. En elogios y testimonios se lo recordaba como un gigante amable y pacificador.

6. Hendrickson, M. (30 de septiembre de 2020), «Dread Head Cowboy Says He Has No Regrets about Horseback Protest», *Chicago Sun-Times*.

En un vídeo ampliamente difundido, de hecho, se escucha a Floyd hacer una sentida petición a los jóvenes para poner fin a la violencia armada⁷. Durante los años noventa, fue rapero y apareció en numerosos *mixtapes* producidos por el legendario DJ Screw de Houston. En 2014, emigró a las Ciudades Gemelas de Minnesota gracias a un ministerio de su iglesia que brindaba una nueva oportunidad, empleo remunerado incluido, a hombres que estaban luchando contra la drogadicción. Floyd encontró trabajo entonces como camionero y guardia de seguridad, pero, al igual que millones de estadounidenses, perdió su puesto laboral cuando el restaurante donde trabajaba como portero cerró tras la orden de confinamiento por el COVID-19. En abril, Floyd dio positivo en las pruebas del virus.

El fatídico día de su encuentro con la policía de Mineápolis, Floyd simplemente estaba disfrutando con sus amigos del fin de semana del Día de los Caídos, como millones de estadounidenses que intentaban encontrar un momento de respiro tras meses de actividad social restringida y con la abrumadora incertidumbre de la pandemia. La policía había acudido a Cup Foods, en la zona del Parque Powderhorn de Mineápolis, después de que, según un dependiente, alguien hubiese usado un billete falso de 20 dólares para comprar cigarrillos. Cuatro agentes interrogaron a Floyd y lo sacaron de su vehículo; tales hechos fueron grabados por los teléfonos móviles de los transúntes, las cámaras corporales de la policía y las cámaras de seguridad de las tiendas cercanas. Las imágenes más impactantes, tomadas por Darnella Frazier, una adolescente de 17 años, muestran al oficial Derek Chauvin arrodillado sobre el cuello de Floyd durante casi nueve minutos, pese a las protestas de los testigos y la oferta de un bombero fuera de servicio para prestar su ayuda. Mientras, Floyd recordaba a su madre y gritaba «no puedo respirar» sin cesar. Los últimos minutos de vida de Floyd recuerdan de un modo inquietante a los de Eric Garner, quien murió asfixiado por la policía de Nueva York en 2014.

7. Floyd, G. (27 de mayo de 2020), «Message from George Floyd to the Youth before His Death», *You Tube*.

La muerte de Floyd formó parte de una sucesión de asesinatos cometidos por «justicieros» y policías que habían provocado la indignación pública en los meses anteriores. En febrero, Ahmaud Arbery, un joven negro de 25 años, fue perseguido mientras hacía deporte y asesinado a tiros por un trío de hombres blancos autoproclamados «vigilantes del barrio». A mediados de marzo, la policía de Louisville disparó fatalmente a Breonna Taylor, una mujer negra de 26 años, cuando ejecutaba una orden de registro en su domicilio sin previo aviso. El 6 de mayo, Dreasjon «Sean» Reed, un joven negro de 21 años y exmilitar de las Fuerzas Aéreas, retransmitió en vivo el tiroteo mortal que le infligió la policía de Indianápolis —que, en las siguientes 24 horas, habría de terminar con la vida de otros dos civiles. El 7 de mayo, McHale Rose, un adolescente negro de 19 años, fue asesinado a tiros y, esa misma noche, un coche patrulla de la policía de Indianápolis atropelló y mató a Ashlynn Lisby, una mujer blanca embarazada —el segundo atropello mortal cometido por la policía de Indianápolis en menos de un mes.

La oleada de indignación por la muerte de Floyd y otros civiles a manos de la policía fue posible gracias al continuo trabajo de activistas antipoliciales, pero también fue consecuencia de las condiciones creadas por la pandemia de coronavirus. Como señaló de forma conmovedora Eric Adams, policía veterano y presidente del Distrito de Brooklyn, las terribles condiciones de la pandemia hicieron que muchos estadounidenses «se sintiesen negros», en el sentido de creer que sus vidas no importaban. El carácter antiliberal de la Administración Trump, su desastrosa gestión de la crisis del coronavirus, unos niveles de desempleo no vistos desde la Gran Depresión y la asombrosa tasa de muertes y ansiedad masiva de la pandemia: todo ello amplificó los costos sociales de la disparidad racial y la precariedad que enfrentaban muchos estadounidenses. Este fue un terreno fértil para el renacimiento y expansión de los sentimientos de Black Lives Matter.

Los focos iniciales de la pandemia, como El Bronx, Nueva Orleans, Detroit y el área meridional de Chicago, registraron las tasas más altas de infección y mortalidad entre la población negra y latina. Algunas personas como Keeanga-Yamahatta Taylor afirmaron que

el nuevo coronavirus constituía una «peste negra»⁸ y docenas de informes y artículos de opinión resaltaron el problema general de las disparidades raciales en la atención sanitaria y resultados en materia de salud. Aunque se aceptaba la realidad de tales disparidades, este lenguaje, hiperbólico y prematuro, tuvo un impacto político al despertar sentimientos latentes de Black Lives Matter. Las poblaciones urbanas negras y latinas eran desproporcionadamente pobres, no tenían seguro o, si lo tenían, era uno insuficiente, y eran más propensas a tener comorbilidades como obesidad, diabetes o cardiopatías, las cuales merman la probabilidad de sobrevivir al virus. Los análisis más exhaustivos, como el de Les Leopold, sugieren que estas disparidades raciales, en realidad, reflejan desigualdad de clase y que el nivel de ingresos es el factor más determinante en la muerte por COVID-19⁹. La pandemia fue, asimismo, una plaga para la tercera edad, ya que la edad, precisamente, era también un predictor de probabilidad de hospitalización y muerte por el virus, y las residencias asistidas y los hogares de ancianos se señalaron por rutina como focos de contagio masivo. Desafortunadamente, la difícil situación de las personas mayores no tiene la misma carga moral que el antirracismo en la vida estadounidense, ni constituye una fuente de movilización igual de poderosa. Además, la demografía de la pandemia, por supuesto, cambió a medida que la enfermedad se propagó más allá de los centros urbanos hacia pueblos más pequeños y zonas rurales, que carecían de la infraestructura sanitaria necesaria para hacer frente al aumento en el número de casos. En muchos aspectos, Trump ayudó a organizar la segunda ola de BLM.

Inicialmente, la Administración Trump respondió a la pandemia con una negación expresa de sus peligros potenciales, antes de adoptar un enfoque más sobrio: prometió entonces apoyo a los funcionarios estatales y locales para ampliar la capacidad hospitalaria y construir

8. Taylor, K. Y. (16 de abril de 2020), «The Black Plague», *The New Yorker*.
9. Leopold, L. (28 de julio de 2020), «COVID-19's Class War», *The American Prospect*. Véanse también Reed, T. F. (13 de agosto de 2020), «The Dangers of Letting Racecraft Displace Class during the Pandemic», *Jacobin*; Robinson, D. E. (9 de junio de 2020) «Why COVID-19 Racial Disparities Make the Case for Medicare for All», *Common Dreams*.

instalaciones al estilo MASH –hospitales quirúrgicos móviles del Ejército– en centros de convenciones. En conjunto con el Congreso, liderado por los republicanos, la Administración proporcionó un enorme rescate económico a las empresas estadounidenses, pero solo tres rondas de pagos de ayuda a algunos de los ciudadanos de los EE. UU. –aun si 40 millones se encontraban sin trabajo y otros tantos más no tenían ahorros o contaban con muy pocos, tenían problemas para pagar el alquiler o la hipoteca, y dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. La lamentable respuesta de la Administración a la pandemia pronto alcanzaría nuevos mínimos, cuando se silenció con efectividad a los expertos médicos de un grupo de trabajo de la Casa Blanca y la crisis de salud pública se convirtió, así, en un asunto político y vehículo de campaña para la derecha. Para la primavera, Trump ya se había unido a gobernadores republicanos y líderes políticos a nivel estatal para convertir la orden de confinamiento obligatorio –entendida globalmente como una estrategia clave para reducir la propagación del virus– en una infracción de la libertad personal y una sentencia de muerte para la economía. Mítines a gran escala en los estados y suburbios republicanos exigieron que se reabriese la economía. Sin embargo, los partidarios de Trump no eran los únicos que sufrían de síndrome de la cabaña y, de algún modo, deseaban volver a alguna versión de la normalidad anterior.

El confinamiento obligatorio era una olla a presión social, puesto que muchos estadounidenses perdieron el tan valioso *tercer espacio*, ese ámbito de actividad más allá de la vida laboral y doméstica donde se desarrollan las principales conexiones y actividades sociales. Justo cuando las órdenes de confinamiento comenzaban a relajarse en muchos estados y ciudades, las protestas por la muerte de Floyd supusieron el regreso de lo social. Las concentraciones multitudinarias en todo el país fueron al mismo tiempo memoriales, reencuentros y festividades, momentos en los que la vida pública se recuperaba. Por encima de todo, al igual que en protestas masivas anteriores, la segunda ola de BLM sirvió de escuela de compromiso cívico y sus repercusiones a nivel individual, generacional, vecinal y comunitario aún no son del todo perceptibles. Lo que sí debería quedar claro, no obstante, es que esta ola de manifestaciones, vigiliias y marchas

constituyó un cuerpo político diferente al que se reflejaba en la Casa Blanca de Trump, dado que millones de estadounidenses rechazaron la noción de que cualquier ciudadano pudiese ser asesinado por la policía con impunidad o dejado a morir por el nuevo coronavirus en la carrera por reactivar los motores del capital.

En medio de la rebelión, Trump recurrió al desgastado guion de campaña de «ley y orden», articulado por vez primera por Ronald Reagan en su carrera a gobernador de California en 1966 e imitado por George Wallace, el alcalde de Chicago Richard J. Daley y Richard Nixon durante la vorágine política de 1968. Trump defendió durante todo el verano las acciones de milicias armadas y contramanifestantes nacionalistas blancos, y cuando se le pidió que repudiase la supremacía blanca en el escenario de un debate presidencial, se negó a hacerlo y le dijo al grupo de chovinistas occidentales autodenominado Proud Boys que «diesen un paso atrás y se mantuviesen a la espera». En medio de las protestas cada vez más intensas en Kenosha (Wisconsin), Trump se puso de la parte de Kyle Rittenhouse, un aspirante a miliciano de 17 años que cruzó la frontera de Illinois con un rifle de asalto, disparó contra tres manifestantes y mató a dos, según él, en defensa propia. Como escribió el columnista del *New York Times* Paul Krugman, desde finales de los años sesenta, «las élites adineradas han convertido el racismo blanco en un arma para ganar poder político, el cual, a su vez, han utilizado para aplicar políticas que hacen más ricos a los ricos a expensas de la clase trabajadora»¹⁰. La Administración Trump ha hecho imposible negar las graves consecuencias de esta estrategia cínica y envejecida.

La securitización y vigilancia policial, la xenofobia, la exclusión racista y la represión del disenso fueron características centrales del ascenso de Trump a la presidencia y de su posterior enfoque de

10. Krugman, P. (1 de junio de 2020), «Trump Takes Us to the Brink», *New York Times*.

gobierno¹¹. Ya había dejado clara su lealtad a «Blue Lives Matter»¹² muchas veces antes. Durante el verano de 2016, cuando su elección aún era poco probable para muchos, Trump fue enfático en su apoyo a la policía. Su respuesta a los acontecimientos de esa semana del 4 de julio –que incluyeron protestas masivas por los asesinatos policiales de Philando Castile en Saint Paul y Alton Sterling en Baton Rouge, así como dos incidentes separados en los que francotiradores negros mataron a unos policías– anticipó los rasgos distintivos de su eventual presidencia. En respuesta a la violencia de ese mes de julio, Trump solo ofreció un vago reconocimiento de las muertes de «dos automovilistas» –aunque Sterling no iba conduciendo en el momento de su mortal detención– e ignoró tanto su negritud como el hecho de que hubieran sido asesinados por la policía. Con todo, Trump sí se aprovechó de los ataques de los francotiradores negros contra la policía para afirmar: «Debemos solidarizarnos con las fuerzas del orden que, debemos recordar, son la fuerza entre la civilización y el caos total». Se hizo eco, así, de la justificación ideológica básica que lleva animando a las fuerzas del orden estadounidenses desde la Guerra Fría.

Al igual que el jefe de policía de Los Ángeles William H. Parker, quien acuñara la expresión de «fina línea azul» más de medio siglo antes, Trump veía el brazo represivo del Estado como necesario para proteger a los ciudadanos respetuosos de la ley y virtuosos de los criminales, los no ciudadanos y todos los que consideraba indignos de protección y derechos. Cuando Parker pronunció esa expresión por primera vez, la noción de proteger la civilización se tenía como políticamente legítima entre los beneficiarios con propiedades, pero como moralmente dudosa en cuanto que medio para proteger un orden racista e injusto que mantenía en un *apartheid* legal a los negros

11. Johnson, C. (2019), «Trumpism, Policing and the Problem of Surplus Population», en J. Kerrissey, E. Weinbaum, C. Hammonds, T. Juravich y D. Clawson (eds.), *Labor in the Time of Trump*, Cornell University Press e ILR, Ithaca.

12. En español, «las vidas azules importan» –en referencia al color del uniforme de la policía–, contramovimiento de los Estados Unidos en respuesta a BLM que aboga por que quienes sean procesados por matar a agentes de las fuerzas de seguridad sean condenados en virtud de las leyes sobre delitos de odio. [N. del T.]

del Sur y en una segregación *de facto* a los de las ciudades del Norte. Tras décadas de abusos policiales documentados, corrupción, violencia y un proceso de expansión carcelaria que empequeñece a todas las demás naciones industriales avanzadas, la idea de que la vigilancia policial «protege» a la civilización de la barbarie es insostenible. *La fina línea azul se ha desgastado y deshilachado*, sobre todo cuando se la observa desde el punto de vista de sus millones de víctimas: las familias que han perdido a seres queridos en incidentes relacionados con sus arrestos, los que han sido torturados en salas de interrogatorio clandestinas, los vigilados, los acosados, los detenidos, los deportados, los encarcelados y los que están en libertad condicional. Que Trump pudiese afirmar estar en el lado correcto de la línea divisoria entre «la civilización y el caos total» era absurdo.

En lugar de intentar engrandecer de nuevo la nación (*MAGA*) y poner fin a la «carnicería estadounidense», tal como había prometido en campaña, la presidencia de Trump llevó a los estadounidenses al borde del caos con una feroz represión policial contra manifestaciones pacíficas, milicias armadas patrullando las calles, saqueos en los distritos comerciales más emblemáticos, masas en abierta rebelión y 200.000 muertes a causa de la pandemia de coronavirus en menos de un año. En vez de intentar resucitar los días felices de la prosperidad suburbana de la Guerra Fría, su Administración reveló todos los fracasos y contradicciones del capitalismo de consumo de la posguerra que Trump imagina como punto álgido de la civilización. Trump redobló la estrategia de la Nueva Derecha, pero el terreno político, económico y demográfico ha cambiado en el medio siglo transcurrido desde que se conjurara por primera vez la reaccionaria «mayoría silenciosa»; por tanto, si bien la sociedad de consumo sigue existiendo, el «sueño estadounidense» de una vida de clase media –que nunca estuvo al alcance de todos– está más amenazado que nunca. La fachada consumista de una buena vida, cuando no la seguridad asociada al sueño estadounidense de la Guerra Fría, se mantiene viva gracias a la proliferación de oportunidades de trabajo esporádico y actividad empresarial autónoma, a la avalancha de crédito fácil –y de deuda–, a los bienes importados de bajo coste y a los servicios de entretenimiento digital y servicios de *streaming*; todo ello posible

gracias a una producción globalizada y de uso intensivo de capital, es decir, la misma fuerza que ha socavado el empleo remunerado y los salarios dignos para millones de estadounidenses¹³. ¿Acaso las protestas masivas tras el asesinato de George Floyd presagian visiones alternativas de la sociedad, donde la profunda desigualdad se aborda a través de medidas sociales progresistas, más que a través del poder carcelario? ¿Darán impulso estas fuerzas populares a reformas moderadas y tecnocráticas, como ocurrió durante el gobierno de Barack Obama? ¿O, en ausencia de un contrapoder efectivo, seremos testigos de cambios más reaccionarios que legitimen la violencia cotidiana del capital o, en su defecto, eliminen de la vista pública sus más ofensivos aspectos? Estas son las alternativas que Black Lives Matter ha introducido en la conciencia pública, y que preocupan y animan los capítulos que siguen.

Los significados de Black Lives Matter

Dada la gran escala, magnitud y diversidad de las resurgentes protestas de Black Lives Matter en 2020, muchos expertos, académicos y activistas celebraron la rebelión tras el asesinato de George Floyd como un hito histórico en el que se vislumbraba la posibilidad de una reforma real del sistema. Para muchos, sin embargo, la euforia del momento inhabilitó cualquier análisis crítico de lo que todo ello significaba en realidad. Uno de los problemas más profundos de la izquierda estadounidense es este: la tendencia a interpretar las protestas siempre como prefigurativas en lugar de como contingentes, siempre como la manifestación de un poder real en lugar de como el reflejo del potencial que tiene algo. Aun así, esta forma de pensar en pos del cumplimiento de ciertos deseos hace olvidar que la

13. Reeves, R. V. (2017), *Dream Hoarders: How the American Upper Middle Class Is Leaving Everyone Else in the Dust, Why That Is a Problem, and What to Do About It*, Brookings Institution, Washington D. C.; Temin, P. (2017), *The Vanishing Middle Class: Prejudice and Power in a Dual Economy*, MIT Press, Boston; Shapiro, T. M. (2017), *Toxic Inequality: How America's Wealth Gap Destroys Mobility, Deepens the Racial Divide, and Threatens Our Future*, Basic Books, Nueva York.

movilización de masas no es lo mismo que el poder organizado y que la movilización de masas hoy en día es mucho más fácil de llevarse a cabo gracias a las infinitas oportunidades para expresar descontento que ofrecen las redes sociales, los recursos en línea, los *memes* y los *videoblogs*. La escala de las protestas puede ser engañosa y su eficacia real, independientemente de su tamaño, depende de coyunturas históricas tales como el equilibrio entre las fuerzas políticas, el poder organizado, la capacidad de la oposición y la claridad de objetivos para todos los activistas. A lo largo de las primeras décadas de este siglo, protestas cada vez mayores han demostrado ser incapaces de consolidarse de modo que pudieran hacer frente a las prerrogativas de la clase dominante de manera eficaz. En la memoria reciente, hemos presenciado sucesivas protestas masivas –manifestaciones de principios de siglo en contra del capitalismo global, protestas contra la llamada Guerra contra el Terrorismo de la Administración Bush, campamentos de Occupy Wall Street, campañas contra los desahucios, la March for Our Lives tras el tiroteo masivo en el instituto Parkland, protestas contra la violencia policial y las deportaciones del ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los EE. UU., entre otras–, pero ninguna ha hecho mucho por deponer el poder de la clase capitalista y el avance del proyecto neoliberal. En todo caso, la hegemonía del capital financiero, los poderes bélicos del Estado de seguridad nacional, la criminalización de la inmigración, el poder del *lobby* de las armas y la impunidad de la policía están más arraigados que nunca.

Algunos activistas aprovecharon de inmediato las protestas de 2020 como evidencia del alcance de Black Lives Matter y, al menos según las encuestas de opinión pública, quedó claro que una nueva mayoría de estadounidenses aceptaba momentáneamente las reivindicaciones centrales de BLM¹⁴. No obstante, si bien muchos estadounidenses se oponían ahora a los excesos más racistas de la vigilancia policial, la mayoría no aceptaba las demandas de desfinanciación y desmantelamiento de la policía que muchos activistas estaban

14. Murray, P. (8 de julio de 2020), «Partisanship Drives the Latest Shift in Race Relations Attitudes», *Monmouth University Polling Institute*.

promoviendo¹⁵. En Mineápolis, después de un verano de intensas protestas, la mayoría de los residentes apoyaban la reasignación de fondos policiales hacia el gasto social, pero solo el 35 % de los residentes negros y el 40 % de los blancos querían ver alguna reducción del personal policial en sus barrios¹⁶. Esto también se cumplía a nivel nacional y en todos los grupos raciales y étnicos de las estadísticas. La rebelión tras el asesinato de George Floyd no solo tuvo el efecto de intensificar la oposición pública a la presidencia de Trump, sino también de poner de relieve las contradicciones internas de Black Lives Matter —en particular, las tensiones entre el valor liberal del eslogan y las fuerzas de izquierda más progresistas y radicales que habían asumido su estandarte.

Durante los años de Obama, las protestas de Black Lives Matter crearon una aparente crisis de legitimidad de la policía como institución. En una ciudad tras otra, en hilos de redes sociales y en la cobertura periodística, Black Lives Matter cambió los términos del debate y amplió la discusión pública desde las demandas específicas de justicia para las víctimas e indemnización para sus familias hasta una exigencia de reforma sistémica más profunda —en sus ángulos más radicales, de la abolición total de la policía y las prisiones. Desde su inicio, con todo, Black Lives Matter fue, en esencia, una expresión del liberalismo racial, hecha más urgente y militante por el contexto de los primeros años de Obama. Durante la campaña de Obama y los primeros años de su gobierno, el primer presidente negro de los EE. UU. se enfrentó a una lluvia de ataques racistas por parte de los manifestantes del Tea Party y los Birthers, liderados por Trump, que cuestionaban su ciudadanía y la constitucionalidad de su presidencia. Tales ataques se leyeron por parte de muchos ciudadanos negros a la luz de sus propias dificultades respecto de la crisis de las hipotecas

15. Russonello, G. (3 de julio de 2020), «Have Americans Warmed to Calls to “Defund the Police”?», *New York Times*; North, A. (23 de junio de 2020), «Defunding the Police: Americans’ Shifting Attitudes, Explained by a Recent Poll», *Vox*; Neumann, S. (9 de julio de 2020), «Police Viewed Less Favorably, but Few Want to “Defund” Them, Survey Says», *NPR*.
16. Roper, E. (19 de agosto de 2020), «Poll: Cuts to Minneapolis Police Ranks Lacks Majority Support», *Star Tribune*; Williams, B. (15 de agosto de 2020), «Poll: Reallocate Money from MPD, but Keep the Department», *MPRNews*.

de alto riesgo y la posterior Gran Recesión. Para muchas personas negras, el racismo hacia Obama era sintomático del problema sin resolver de la «línea de color». Si el *hashtag* BLM surgió de la creciente eficacia política engendrada por el fenómeno Obama, lo hizo igualmente como rechazo a la afirmación conservadora de que su elección significaba el amanecer de una sociedad postracial. En el contexto específico de la vigilancia policial y la violencia de los «justicieros», Black Lives Matter insistía en que los negros merecen igual protección ante la ley, es decir, insistía en la aplicación directa y significativa de la Constitución estadounidense —un objetivo absolutamente digno y, por definición, también liberal. En nuestro panorama cultural del siglo XXI, el problema de la protección desigual se ha plasmado gráficamente en vídeos virales de asesinatos y abusos policiales a ciudadanos negros.

El impacto más inmediato del *hashtag* y el tipo de seguimiento público de la actividad policial que este facilitó fue haber hecho públicas actividades que históricamente habían sido clandestinas. La tortura y violencia policiales son un problema de larga data, con generaciones de denuncias formales, litigios y campañas de activismo como evidencia. Sin embargo, los sentimientos de Black Lives Matter, combinados con la vigilancia social y los flujos de información instantánea a través de la comunicación celular en red hicieron que estos incidentes fuesen más visibles que nunca. De una manera que recuerda a la cobertura televisiva de las manifestaciones por los derechos civiles, que obligó a algunos blancos del norte a ser testigos de la brutalidad sufrida por los negros del sur que exigían ciertos derechos básicos, los vídeos virales de los asesinatos policiales crearon una disonancia similar entre el tan aclamado progreso que simbolizaba la elección de Barack Obama y el trato brutal de civiles negros por parte de la policía. Millones de estadounidenses se convirtieron en espectadores de la violencia policial: los vídeos, las investigaciones y las manifestaciones que siguieron socavaron la confianza pública en los informes oficiales que justificaban rutinariamente el uso letal de la fuerza. Vídeo viral tras vídeo viral, se desmentían conocidos argumentos de defensa propia como «es que se estaba llevando la mano al cinturón», «el sospechoso fue quien agredió primero», «es

que se estaba resistiendo al arresto», etc. En la mayoría de los casos, los vídeos humanizaban a las víctimas de modo que los comunicados de prensa, siempre cuidadosamente redactados, y la manipulación departamental nunca habrían permitido, lo cual desencadenó un creciente clamor por reformas institucionales y justicia inmediata para las víctimas.

En unos pocos años, las protestas masivas, los foros públicos, las tácticas preventivas y la organización comunitaria produjeron algunas notables reformas orientadas a crear una mayor responsabilidad y transparencia policiales, y una mayor capacidad de supervisión y toma de decisiones públicas. Ciudades como Baltimore y Chicago fueron objeto de investigaciones por parte del Departamento de Justicia de los EE. UU. en respuesta a sonadas muertes bajo custodia policial. En numerosos núcleos urbanos, los agentes implicados en cada crimen fueron despedidos y, en ciertos casos, imputados y llevados a juicio con resultados dispares. En Baltimore, se acusó de mala conducta a los cuatro involucrados en la muerte de Freddie Gray en 2015, pero ninguno de ellos fue declarado culpable. En Chicago, Jason Van Dyke fue condenado por 16 cargos de asesinato en segundo grado por la muerte de Laquan McDonald en 2014: uno por cada disparo que el primero dio contra el cuerpo del segundo. El Grupo de Trabajo del Presidente Obama sobre la Policía del Siglo XXI recomendó modificaciones procedimentales tales como la formación en torno a prejuicios raciales implícitos, la revisión de las políticas sobre el uso de la fuerza y la habilitación de procesos que pudiesen identificar a agentes problemáticos. De hecho, la Administración también apoyó un programa federal para subvencionar la compra de cámaras corporales para los departamentos de policía locales.

Durante la época de Obama, fructificaron otras medidas estatales y locales destinadas a reformar el régimen carcelario, muchas de ellas enfocadas en reparar los daños causados por la Guerra contra las Drogas y en abordar las formas en las que se castiga a la gente pobre por cometer delitos de supervivencia. Algunas organizaciones como Innocence Project trabajaron para anular decenas de condenas injustas. La despenalización y legalización del cannabis se convirtió en una realidad en las partes más urbanas y progresistas del país, y

algunos estados incluyeron la eliminación de antecedentes y exoneración de delitos menores, anteriores y relacionados con el cannabis como parte de sus legislaciones. Otras organizaciones como Just Leadership USA presentaron, en inglés, una «Carta de Derechos para Trabajadores Criminalizados»¹⁷ con el objetivo de abordar el desempleo y discriminación que enfrentan las personas con antecedentes penales. La despenalización del trabajo sexual ganó impulso en algunas ciudades, especialmente en aquellas donde este tipo de trabajo representa un aspecto crítico, pero deshonrado e ilegal, de la economía turística, y donde las y los trabajadores sexuales se enfrentan a detenciones y encarcelamientos habituales, así como a la violencia y precariedad de un mercado laboral no regulado. Otros condados y estados tomaron medidas para acabar con la libertad bajo fianza, considerada una penalización contra los pobres y una de las causas de hacinamiento en muchas prisiones. Por último, muchas jurisdicciones impulsaron el encarcelamiento electrónico –el uso de la vigilancia electrónica en lugar de la detención física– como forma de reunir a los infractores con sus familias y comunidades y reducir el tamaño del Estado carcelario¹⁸.

Si bien tales reformas proporcionan las bases para construir una oposición popular aún más amplia al régimen carcelario, es probable que las maniobras de relaciones públicas y las inversiones de corporaciones y organizaciones sin ánimo de lucro tras la rebelión por George Floyd promuevan asociaciones neoliberales público-privadas y reformas incrementales en el futuro próximo, así como que eclipsen las demandas más progresistas de las fuerzas abolicionistas. Solo en junio de 2020, las empresas prometieron más de dos mil millones de dólares en apoyo a diversas iniciativas y causas antirracistas. Los ejecutivos de Warner, Sony Music y Wal-Mart se comprometieron

17. Just Leadership USA (10 de mayo de 2018), «Bill of Rights for Criminalized Workers», *jlusa.org*.

18. Kilgore, J. (9 de abril de 2015), «The Spread of Electronic Monitoring: No Quick Fix for Mass Incarceration», *Prison Legal News* –véase también el blog de Kilgore, *Challenging E-Carceration: The Voice of the Monitored*, en *challengingcarceration.org*–; Alexander, M. (8 de noviembre de 2018), «The Newest Jim Crow», *New York Times*.

a aportar 100 millones cada uno. Apple prometió la misma cantidad para la creación de una iniciativa de equidad y justicia raciales. Google prometió 175 millones, destinados en gran parte a la incubación de emprendimiento negro. YouTube anunció una iniciativa de 100 millones para amplificar las voces negras en los medios de comunicación. Cientos de empresas publicaron mensajes a favor de Black Lives Matter en el «Blackout Tuesday»¹⁹. En solidaridad con los manifestantes que exigían justicia para Breonna Taylor, la magnate mediática Oprah Winfrey pagó 26 vallas publicitarias con retratos de Taylor por todo Louisville, Kentucky. También aparecieron retratos de Taylor en las portadas de *Vanity Fair* y *O Magazine* –de Winfrey. Servicios de *streaming* como Hulu, Netflix y Amazon Prime destacaron el cine, las series de televisión y los documentales sobre y por población negra de una forma reservada habitualmente para el Mes de la Historia Negra, en febrero. General Motors, Best Buy, Lyft, Amazon, Mastercard, la NFL, Nike, Spotify y otras compañías concedieron a sus empleados un día libre remunerado por el «Juneteenth», en su origen una festividad del este de Texas que conmemoraba el momento en el que los esclavos en Galveston recibieron tardíamente la noticia de su propia emancipación.

Esta respuesta corporativa no es una cooptación tal como se ha llegado a afirmar. La cooptación es un proceso por el que los poderes establecidos ceden ante las luchas populares y abrazan su liderazgo por necesidad, porque esas fuerzas amenazan la preservación del statu quo. El masivo derrame de apoyo financiero desde las instituciones dominantes fue un ejemplo de convergencia ideológica entre el liberalismo racial militante de Black Lives Matter y el liberalismo racial operativo de la clase inversora.

Esta convergencia ya estaba presente mucho antes de las protestas por George Floyd y la oleada de inclusión forzada por el *blackwashing*

19. En español, «martes de apagón», acción colectiva contra el racismo y la brutalidad policial en los EE. UU., organizada por la industria musical del país en respuesta a los asesinatos de George Floyd, Breonna Taylor y Ahmaud Arbery. Tuvo lugar el 2 de junio de 2020 y se animó a las empresas participantes a abstenerse de publicar música y realizar otras operaciones comerciales a lo largo de toda la jornada. [N. del T.]

corporativo que les siguió. El jugador de la NFL Colin Kaepernick animaba a las fuerzas de BLM al arrodillarse en silencio contra la violencia policial durante su himno nacional al comienzo de cada partido. Sus acciones provocaron una reacción violenta por parte de aficionados de derechas y políticos como Trump, y finalmente lo llevaron a ser excluido por parte de los dueños de los equipos de la Liga. ¿Qué pasó después? Nike firmó con un desempleado Kaepernick un contrato multimillonario para producir su propia línea de ropa deportiva y calzado. En los centros urbanos no tardaron en aparecer vallas publicitarias con el rostro pensativo de Kaepernick y el lema «cree en algo, incluso si ese algo significa sacrificarlo todo». Este tipo de sentimentalismo liberal corporativo, que el historiador Thomas Frank identificó como surgido de las agencias publicitarias de Madison Avenue durante los años sesenta²⁰, es hoy en día indistinguible de la protesta orgánica en sí. Si el carácter oportunista y superficial del gesto de Nike no había quedado lo suficientemente claro, la empresa extendió su contrato de ocho años con la NFL por la suma de mil millones de dólares. La línea que separa la protesta existencial del interés corporativo quedó igualmente desdibujada durante el tan celebrado espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2016 por parte de la superestrella Beyoncé Knowles. Cuando la cantante y sus bailarines se pusieron chaquetas y boinas de cuero y alzaron el puño en señal del Poder Negro, las redes sociales se inundaron de celebraciones por este homenaje al Partido de las Panteras Negras y a las protestas contra la brutalidad policial que seguían en curso. De algún modo, las alabanzas al espectáculo perdieron de vista la flagrante contradicción de que Knowles había decidido obtener ganancias y hacer las paces con la misma organización que hubo coartado el derecho a la libertad de expresión de sus jugadores cuando protestaron contra la brutalidad policial. En cierto nivel, esto podría parecer de una hipocresía asombrosa, pero no lo es si aceptamos que algunos elementos de Black Lives Matter y del complejo empresarial de los medios de comunicación y del entretenimiento están unidos

20. Frank, T. (1998), *The Conquest of Cool: Business Culture, Counterculture, and the Rise of Hip Consumerism*, University of Chicago Press, Chicago.

en su compromiso con un orden capitalista más racialmente justo. Además, ciertos elementos del mundo de las fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro han estado presentes en la organización de Black Lives Matter desde el principio.

Aunque la primera ola de BLM tuvo un tinte liberal, las luchas contra la violencia policial han formado parte durante mucho tiempo de las políticas izquierdistas en los EE. UU. por los derechos civiles, laborales, socialistas y anarquistas —movimientos que, a menudo, se enfrentaron al poder policial como defensor de los intereses de la clase capitalista. Asimismo, las políticas negras posteriores a la segregación dieron lugar a algunas de las primeras críticas intelectuales de lo que, con el tiempo, se terminaría llamando encarcelamiento masivo. La violencia policial contra civiles negros ha sido el desencadenante de la mayoría de las rebeliones urbanas negras desde los años sesenta. De la misma manera, las luchas contra la brutalidad policial originaron patrullas de control lideradas por activistas negros tras la rebelión de Watts en 1965, así como la formación del Partido de las Panteras Negras para la Autodefensa en Oakland en 1967 y su popularidad en todos los barrios negros de clase trabajadora del país²¹. El encarcelamiento injusto de los radicales del Poder Negro y sus campañas de defensa legal, el intento fallido de Jonathan Jackson de liberar a los Hermanos Soledad en 1970 y el levantamiento de Attica al año siguiente, cuando los presos exigieron mejores condiciones²²: todo ello provocó análisis críticos, tanto populares como académicos, sobre la vigilancia policial y el encarcelamiento masivo. Algunas fuerzas antipoliciales recientes descienden de estas luchas anteriores.

21. Horne, G. (1997), *The Fire This Time: The Watts Uprising and the 1960s*, Da Capo Press, Nueva York; Bloom, J. y Martin, W. E., Jr. (2013), *Black against Empire: The History and Politics of the Black Panther Party*, University of California Press, Berkeley; Murch, D. J. (2010), *Living for the City: Migration, Education, and the Rise of the Black Panther Party in Oakland, California*, University of North Carolina Press, Chapel Hill; Rhomberg, C. (2004), *No There There: Race, Class, and Political Community in Oakland*, University of California Press, Berkeley; Self, R. O. (2003), *American Babylon: Race and the Struggle for Postwar Oakland*, Princeton University Press, Princeton.
22. Wicker, T. (2011), *A Time to Die: The Attica Prison Revolt*, Haymarket, Chicago; Thompson, H. A. (2017), *Blood in the Water: The Attica Prison Uprising of 1971 and Its Legacy*, Vintage Books, Nueva York.

Incluso antes de que se acuñara el *hashtag* Black Lives Matter, activistas de Occupy Oakland, grupos comunitarios, organizaciones estudiantiles y estibadores sindicales lideraron protestas masivas tras el asesinato de Oscar Grant a manos de policías de BART (Bay Area Rapid Transit) en 2009. A diferencia de algunas tendencias posteriores de BLM, animadas por políticas liberales antirracistas, estas luchas más izquierdistas vincularon el problema del exceso de represión policial a una crítica más amplia contra el capitalismo global, la gentrificación, la crisis de las hipotecas de alto riesgo, la Gran Recesión y la profunda desigualdad de riqueza en la vida estadounidense. Organizaciones posteriores de Black Lives Matter como Black Youth Project 100 (BYP100), Assata's Daughters y Dream Defenders, entre otras, impulsaron una política más progresista y de izquierda radical que la de los creadores del *hashtag* o celebridades como DeRay McKesson, Johnetta Elzie y el abogado Ben Crump. Este libro se inspira y viene informado por este ala izquierda de las luchas antipoliciales contemporáneas, especialmente aquellas fuerzas que tratan el problema de la policía como una dimensión del capitalismo tardío y que están comprometidas con una política redistributiva centrada en los bienes públicos.

Los Estados Unidos tras Black Lives Matter

Esta obra aborda críticamente el pensamiento y la política de las luchas antipoliciales contemporáneas, así como su significado para la izquierda estadounidense en general. El libro fundamenta los orígenes y dinámicas centrales del régimen carcelario actual dentro de las contradicciones sociales del capitalismo. Como afirmó Sidney L. Harring hace algún tiempo, «en un sentido muy real, la lucha de clases está en el núcleo de la función policial»²³. A lo largo de esta obra, la clase se entiende como una relación social y un proceso de acumulación de capital, no simplemente como una métrica demográfica o variable

23. Harring, S. L. (2017), *Policing a Class Society: The Experience of American Cities, 1865-1915*, Haymarket Press, Chicago, pp. 4-5.

dependiente, utilizada con fines de análisis estadístico –como son el nivel de ingresos o la educación. La división de clases central en la sociedad capitalista es entre el capital y el trabajo, los propietarios de los medios de producción y aquellos que deben vender su fuerza de trabajo para sobrevivir; este antagonismo fundamental es lo que genera un sistema dinámico de fracciones de clase y conflictos intraclase. Los intereses de clase no están estrictamente determinados por factores económicos, sino que se moldean a través de procesos históricos y políticos. Por tanto, las clases no carecen de sus propias divisiones internas sociales, políticas, sectoriales y de otros tipos, y lo que se destaca a lo largo del libro son las *experiencias de clase situadas* de diversos protagonistas históricos: la clase pobre urbana, los políticos, los gentrificadores de clase media, las patrullas de policía, los burócratas sindicales, los obreros en producciones en cadena, los activistas, los promotores inmobiliarios, los veteranos de guerra, etc.

Lejos de ser una distracción para cuestiones supuestamente más importantes, las luchas populares contra la vigilancia policial y el encarcelamiento masivo involucran dimensiones centrales del capitalismo de consumo y la neoliberalización. La policía continúa existiendo para el avance de los intereses del capital, pero su función ha evolucionado junto con el alejamiento de la economía fordista y, en nuestros tiempos, refleja nuevas capacidades tecnológicas, requisitos sociales y motivos políticos. Como se detalla en este libro, la policía tal como la conocemos hoy existe para la defensa de las relaciones de propiedad, para la protección de los espacios de consumo minorista y turístico y los procesos de valoración y desarrollo inmobiliario metropolitano, y para la regulación de poblaciones excedentes relativas que se consideran amenazas para tal régimen de acumulación. La clase trabajadora negra urbana ha sido la más castigada por el poder carcelario debido a su particular posición estructural, producida por la transformación de las ciudades estadounidenses en la posguerra y por las inadecuadas medidas liberales contra la pobreza durante la Segunda Reconstrucción²⁴. Esta posición estructural precaria se vio

24. La Reconstrucción es el periodo de la historia estadounidense, entre 1865 y 1877, por el que se pone fin a la esclavitud racial y demás restos del nacionalismo

agravada por los procesos concomitantes de desindustrialización, producción globalizada y austeridad que convirtieron a la clase pobre negra urbana en un prolongado símbolo cultural de los fracasos y límites de la sociedad.

Pensar la desigualdad estadounidense a través de, principalmente, interpretaciones esencialistas de la raza no nos ayuda a ver cómo opera la policía más allá del teatro urbano de las protestas de Black Lives Matter, ni su carácter fundamental de clase²⁵. Los ciudadanos negros tienen más probabilidades de ser vigilados, agredidos y asesinados por la policía. Además, de entre las personas que mueren a manos de la policía, independientemente de su color de piel, los ciudadanos negros tienen más probabilidades de estar desarmados. Sin embargo, como advierten Adam Rothman y Barbara Fields, «la piel blanca no proporciona inmunidad»²⁶ en cuestiones de vigilancia y violencia policiales. Desde la invención del *hashtag* Black Lives Matter, los blancos todavía representan la mitad de las personas abatidas por la policía anualmente. Aunque los datos sobre la clase social no son tan extensos como los raciales, quienes viven en barrios obreros y pobres tienen más probabilidades de ser asesinados por la policía²⁷.

Eslóganes como «el Nuevo Jim Crow» y «las vidas negras importan», y la idea de que el aparato carcelario existe para «controlar

confederado. La Segunda Reconstrucción es, por similitud, el movimiento por los derechos civiles que tiene lugar desde 1956 hasta 1969 aproximadamente. [N. del T.]

25. Véanse Clegg, J. y Usmani, A. (2019), «The Economic Origins of Mass Incarceration», *Catalyst*, vol. 3, núm. 3, pp. 9-53; Lewis, N. (30 de enero de 2018), «Mass Incarceration: New Jim Crow, Class War, or Both?», *People's Policy Project*; Spence, L. (16 de agosto de 2016), «Policing Class», *Jacobin*; Reed, A., Jr. (16 de septiembre de 2016), «How Racial Disparity Does Not Help Make Sense of Patterns of Police Violence», *Nonsite*.
26. Rothman, A. y Fields, B. J. (24 de julio de 2020), «The Death of Hannah Fizer», *Dissent*.
27. Feldman, J. M., Gruskin, S., Coull, B. A. y Krieger, N. (2019), «Police-Related Deaths and Neighborhood Economic and Racial/Ethnic Polarization, United States, 2015-2016», *American Journal of Public Health*, vol. 109, núm. 3, pp. 458-64; Parenti, C. (9 de julio de 2020), «The Surprising Geography of Police Killings: Back-of-the-Napkin Calculations on Race, Region and Violence», *Nonsite*; Jilani, Z. (8 de julio de 2015), «95 % of Police Killings in 2015 Occurred in Neighborhoods with Incomes under \$100.000», *alternet.org*.

a los cuerpos negros», apelan a comprensiones liberales del sentido común ante la desigualdad estadounidense. Hay que tener también en cuenta que pensar esta desigualdad en términos fundamentalmente raciales llegó a dominar la cultura estadounidense durante la Guerra Fría, al mismo tiempo que las visiones anticapitalistas de la izquierda estaban siendo desterradas del debate político considerado aceptable. Incluso cuando inspiran movilizaciones populares, los discursos de justicia racial oscurecen las dinámicas nacionales más amplias de la vigilancia policial y el encarcelamiento masivo, extensamente sufridas por los elementos más sumergidos de la clase trabajadora en cualquier color de piel. Este énfasis en el racismo estructural impulsa soluciones liberales como la formación en torno a prejuicios raciales implícitos, las cámaras corporales, la contratación de más agentes y administradores de policía negros, etc. El enfoque singular en la racialidad también trunca las bases sociales, erige barreras innecesarias entre posibles aliados y confunde la lógica central de la policía —cómo esta está conectada con la reproducción de la economía de mercado, los procesos de desarrollo inmobiliario en las ciudades centrales y la gestión de los excedentes poblacionales.

El carácter de clase de la vigilancia policial se ve obviado por el poder abrumador que tiene el discurso de la justicia racial. En otras ocasiones, los activistas suprimen las realidades materiales que unen a las víctimas —sin importar su color de piel— por razones progresistas: como estrategia preventiva, muchos activistas antipoliciales, así como familiares y abogados de las víctimas, han luchado contra los intentos de sacar a la luz los antecedentes penales o los errores personales de estas últimas. Los críticos derechistas y los sindicatos policiales utilizan por rutina cualquier aspecto negativo del historial de la víctima para justificar las actuaciones policiales y aplacar las críticas de la opinión pública. Hay que reprender a los conservadores que buscan demonizar a los damnificados, pero cuando los defensores liberales suprimen ciertos detalles incómodos, invisibilizan las experiencias comunes de las víctimas dentro del subproletariado. George Floyd estaba en paro y, presuntamente, usaba dinero falso; Eric Garner vendía «*loosies*», cigarrillos sueltos y desgravados, para ganarse la vida; Alton Sterling vendía discos usados y pirateados frente a una

gasolinera; en el momento de su detención fatal, Walter Scott tenía una orden de arresto por pagos atrasados de manutención infantil. Docenas de encuentros mortales con la policía resultan de infracciones menores, como una luz trasera rota, una matrícula caducada o una multa impagada, que son más síntomas de dificultades económicas que amenazas reales a la seguridad pública.

Y luego está la dimensión de clase de las sucesivas guerras contra la droga y la red de leyes arbitrarias, injustas y poco éticas que siguen castigando a los más pobres por delitos de supervivencia. Freddie Gray tenía un historial de delitos menores relacionados con las drogas, al igual que muchas otras víctimas de la violencia policial. Rayshard Brooks fue asesinado a tiros por la espalda mientras huía de la policía tras una refriega en junio de 2020, lo cual desató una oleada de protestas en Atlanta²⁸. También él era un exconvicto. Solo unos meses antes de su muerte, Brooks concedió una entrevista en vídeo en la que hablaba abiertamente de sus experiencias después de salir de prisión y las dificultades para encontrar empleo y superar el estigma del encarcelamiento. En un momento dado de la entrevista afirma que desearía que «el sistema pudiera vernos como individuos [...] y no meramente como animales»²⁹. Los activistas hacen bien en resistirse a los intentos oficiales de desacreditar a las víctimas, pero el hecho de que tantas recurran al crimen para sobrevivir, a formas de trabajo criminalizadas para ganarse la vida, sigue siendo de vital importancia para comprender la situación de clase común a todos los estadounidenses sometidos a una vigilancia excesiva y un trato brutal por parte de la policía.

El carácter de clase de la vigilancia policial se manifiesta de otras maneras. Personas que tal vez no estén implicadas en delitos de supervivencia, pero que viven en zonas clave de control policial, pueden ser arrastradas a esta red con consecuencias letales. El asesinato de Breonna Taylor es un ejemplo de ello. Esta trabajadora sanitaria de

28. Bethea, C. (17 de junio de 2020), «“The Plight of the Fight”: A View from Atlanta after the Killing of Rayshard Brooks», *The New Yorker*.

29. Brooks, R. (18 de junio de 2020), «Rayshard Brooks Vows to “Keep Going Until I Make It” in Interview before His Death», *NBC News NOW*.

urgencias, de 26 años de edad, fue asesinada por la policía cuando irrumpió en su domicilio con una orden de registro sin previo aviso que, en realidad, estaba dirigida a su exnovio. En los meses de protestas que siguieron a su muerte, los activistas enfatizaron que Taylor vivía en una zona en proceso de gentrificación en la que las redadas policiales formaban parte de una estrategia más amplia de limpiar el vecindario y, así, valorizar el mercado inmobiliario³⁰. Las soluciones técnicas a estos problemas –mejores entrenamientos, creación de relaciones más eficaces entre la policía y la comunidad, etc.– podrían reducir los incidentes en algunos lugares, pero las causas profundas se encuentran más allá, en el propio sistema de acumulación que produce personas desechables y que valora la propiedad y la obtención de beneficios por encima de la vida y la paz comunal.

La rebelión por George Floyd reflejó la emergencia de una mayoría antirracista, pero no así de las coaliciones locales y mayorías gubernamentales necesarias para lograr reformas políticas concretas en torno a la mala conducta policial. Tanto el ayuntamiento de Mineápolis como el de Seattle habían conseguido, en apariencia al menos, mayorías con poder de veto a favor de dismantelar los departamentos de policía y diseñar medios restaurativos, progresistas y no violentos para alcanzar la seguridad pública, pero el camino para llevar a cabo tales reformas se derrumbó a finales del verano³¹. Estas reformas parecen aún menos probables en ciudades como Jackson, en Misisipi, que se promocionó en la izquierda como un modelo de liderazgo político negro radical una vez que el fallecido Chokwe Lumumba, veterano de Republic of New Afrika –una organización del Poder Negro–, fue elegido alcalde en 2013 y cuando su hijo, Chokwe Antar Lumumba, se hizo con el mismo cargo en 2017³².

30. Duvall, T., Kachmar, K. y Costello, D. (4 de junio de 2020), «“Rogue” Unit or Targeted Initiative? Why Police’s New Place-Based Squad is Causing a Stir», *Louisville Courier-Journal*.

31. Herndon, A. W. (26 de septiembre de 2020), «How a Pledge to Dismantle the Minneapolis Police Collapsed», *New York Times*.

32. Mitter, S. (1 de octubre de 2013), «The Revolutionary Mayor of Jackson, Mississippi», *Al Jazeera America*; Lartey, J. (11 de septiembre de 2017), «A Revolutionary, Not a Liberal: Can a Radical Black Mayor Bring Change to Mississippi?», *Guardian*; Nichols, J. (7 de octubre de 2019), «How to Be a

A pesar de su mando progresista como alcalde y de una ciudadanía mayoritariamente negra, el ayuntamiento de Jackson aprobó en septiembre de 2020 medidas para aumentar el salario de la policía y mejorar las prestaciones sanitarias de los agentes solteros, así como planes para alquilar más espacio en las cárceles con el que gestionar los arrestos por delitos menores. Al igual que en Mineápolis y Seattle, una vez han terminado las protestas, Jackson sigue gobernado por unos arraigados intereses que consideran la labor policial como necesaria para el orden municipal y el desarrollo económico —es decir, los intereses de la clase donante, promotores inmobiliarios, empresas multinacionales e inversores que viven fuera de los límites de la ciudad. Que las protestas populares de 2020 se conviertan en una fuerza capaz de gobierno dependerá de la habilidad de activistas y simpatizantes para construir verdaderas bases sociales más allá de los ciclos de protesta y para evitar algunos de los problemas que ya amenazan con obstaculizar una cooperación sostenida en el tiempo.

Tras las manifestaciones formativas de Black Lives Matter orquestadas por activistas y organizaciones negras en Ferguson, Baltimore y Chicago, el epicentro se desplazó durante la rebelión por George Floyd hacia algunas de las ciudades más blancas del país, como Mineápolis (63,8 % de población blanca), Seattle (65,7 %), Portland (72,2 %) y Kenosha (67,3 %). El cambio en la composición racial de las protestas en estas ciudades fue tan drástico que algunos activistas negros se sintieron desconcertados y adoptaron su propia versión del discurso conservador del «agitador externo» para quejarse abiertamente de que su movimiento había sido secuestrado³³. Los blancos siempre habían participado en las manifestaciones de Black Lives Matter, pero la afluencia de apoyo blanco cambió el carácter de muchas protestas, con tácticas más visibles por parte del bloque negro y unas sensibilidades anarquistas que competían con las prácticas de los organizadores locales de BLM. En Portland, el

Radical Mayor», *Nation*; Gilbert, K. (5 de septiembre de 2019), «The Socialist Experiment», *Oxford American*.

33. Stockman, F. (30 de septiembre de 2020), «The Truth about Today's Anarchists», *New York Times*; Kang, J. C. (2 de julio de 2020), «Can We Please Talk about Black Lives Matter for One Second?», *New York Times*.

«Muro de las Madres», mayoritariamente blancas, que se alineaban brazo con brazo vistiendo camisetas de color amarillo girasol para proteger a los manifestantes de la policía, y la «Atenea desnuda», una anónima artista de *performance* que se enfrentó a los agentes federales que Trump había enviado a las calles de la ciudad, inspiraron a muchas personas en todo el país. Con todo, algunos activistas negros se indignaron al considerar estas acciones como una distracción y argumentaron que Black Lives Matter debía seguir siendo liderado por personas negras³⁴.

La rebelión por George Floyd ha revelado cómo las políticas identitarias continúan siendo una poderosa fuente de movilización, pero también un medio inestable y poco sólido para construir movimientos sociales y sostener un trabajo político prolongado. La compasión por las víctimas negras de la violencia policial fue crucial para estas movilizaciones, pero para el otoño de 2020 el apoyo público a Black Lives Matter —especialmente, entre los blancos— había disminuido y el apoyo propiamente blanco, regresado al modesto nivel de los años de Obama. En Wisconsin, el apoyo a BLM cayó del 61 % a mediados de junio de 2020 al 48 % a finales de agosto, incluso después de que la policía de Kenosha disparara a Jacob Blake delante de sus hijos y lo dejara parálítico³⁵. Es probable que este retroceso refleje no solo la fatiga por la compasión humana, sino también los límites del privilegio blanco y otras expresiones del discurso antirracista que han sido empleadas como estrategias organizativas³⁶. La afirmación predominante de que el poder carcelario está impulsado por el racismo estructural, así como los compromisos culturales que existen entre el vanguardismo negro y el papel aliado de las personas blancas —un vestigio de la política de la Nueva Izquierda de los años

34. Blaec, J. (3 de agosto de 2020), «The Complicated Rise and Swift Fall of Portland's Wall of Moms Protest Group», *Portland Monthly*; Minutaglio, R. (29 de julio de 2020), «Portland's Polarizing "Naked Athena" On Why She Stripped Down», *Elle*.

35. Blake, A. (29 de agosto de 2020), «A Slip in Support for Black Lives Matter?», *Washington Post*.

36. Johnson, C. (9 de septiembre de 2019), «The Wages of Roediger: Why Three Decades of Whiteness Studies Has Not Produced the Left We Need», *Nonsite*.

sesenta—, siguen siendo obstáculos titánicos para el desarrollo de un auténtico consenso popular dedicado a una agenda progresista de reforma carcelaria.

Nuestro actual régimen policial no se deriva ni se mantiene exclusivamente a través de la supremacía blanca, como sostienen algunos activistas; más bien, la expansión carcelaria de finales del siglo xx fue impulsada por múltiples intereses políticos y económicos que no se reducen a la cínica movilización del racismo, sino que también incluyen los intereses y necesidades que tenían las clases trabajadoras urbanas afroestadounidenses y latinas —quienes deseaban la paz y el cese de los niveles inaceptables de delincuencia y violencia relacionadas con las drogas que aún definen la vida de millones de estadounidenses en las grandes ciudades³⁷. Para la clase trabajadora negra y latina de estos «guetos», la fina línea azul siempre ha estado tensa, pero las movilizaciones populares de la última década han despertado a la sociedad en general ante los fallos sistemáticos, la malicia y los abusos policiales. De la misma forma, a medida que los procesos socialmente disruptivos de la intensificación del capital y la producción globalizada han avanzado a buen ritmo, y que la neoliberalización ha desarticulado las benévolas funciones del antiguo Estado del bienestar, cada vez más estadounidenses se encuentran en el lado equivocado de dicha fina línea azul. El comentario de Eric Adams sobre que muchas personas estadounidenses «se sientan negras» en medio de la precariedad de la pandemia habla de esta realidad, pero, como ocurre con gran parte de los sentimientos hacia Black Lives Matter, el lenguaje simbólico de la raza nos falla. Es un poderoso medio para recordar y nombrar los límites del proyecto democrático liberal que aún no se ha cumplido en los EE. UU. y, a

37. Para análisis matizados de la política negra y la expansión del Estado carcelario, véanse Fortner, M. J. (2015), *Black Silent Majority: The Rockefeller Drug Laws and the Politics of Punishment*, Harvard University Press, Cambridge; Murch, D. (2015), «Crack in Los Angeles: Crisis, Militarization and Black Response to the Late Twentieth-Century War on Drugs», *Journal of American History*, vol. 102, núm. 1, pp. 162-73; Forman, Jr., J. (2017), *Locking Up Our Own: Crime and Punishment in Black America*, Straus and Giroux, Farrar.

la vez, una retórica que oscurece el poder del capital sobre nuestras vidas y el papel de la policía en el mantenimiento de su omnipotencia.

La vigilancia policial es central para mantener los sectores comerciales, inmobiliarios, turísticos y de entretenimiento de los que todos dependemos para nuestra vida laboral, nuestro ocio y nuestra reproducción cotidiana. Desarrollar un poder popular capaz de transformar este sistema requerirá, probablemente, avanzar desde un rechazo masivo del racismo –valioso en sí mismo– hacia una visión compartida de una sociedad justa: una que trascienda la explotación capitalista, la desposesión y la violencia, y que, por medios democráticos populares, determine las intervenciones estatales específicas, los sacrificios personales y colectivos, y las políticas distributivas necesarias para crear y sostener la sociedad en sí. En la medida en la que los activistas puedan construir una política izquierdista ampliamente redistributiva centrada en los bienes públicos –como medio para eliminar la privatización y la delincuencia, garantizar la seguridad pública a través de una mayor igualdad y seguridad económicas, y mejorar la calidad de vida en toda la sociedad urbana–, podrán surgir poderosas coaliciones basadas en intereses comunes. «Refrenar a la policía asesina, invertir en escuelas en lugar de en prisiones, proporcionar atención médica universal –incluyendo tratamientos por drogadicción y rehabilitaciones para adictos en zonas rurales–, aumentar los impuestos a los ricos y poner fin a guerras absurdas», como explican Rothman y Fields, «son políticas que beneficiarían a una sólida mayoría del pueblo estadounidense»³⁸. Las luchas por desfinanciar, desmilitarizar y dismantelar los departamentos de policía, que entraron con fuerza en el debate público con la rebelión por George Floyd, representan una posible apertura hacia un orden más justo, pero merecen también un análisis crítico y un serio debate³⁹.

38. Rothman, A. y Fields, B.J. (24 de julio de 2020), «The Death of Hannah Fizer», *Dissent*.

39. Kaba, M. (12 de junio de 2020), «Yes, We Mean Literally Abolish the Police», *New York Times*; Scoppe, C. R. (13 de junio de 2020), «Scary Demands to “Defund Police” Won’t Fix Anything. These Reforms Will», *Post and Courier*; Levitz, E. (12 de junio de 2020), «Defunding the Police is Not Nearly Enough», *New York Magazine*; Brown, M. (2020), «Transformative Justice and New Abolition in the United States», en P. Carlen y L. Ayres-França (eds.), *Justice*

¿Qué queda por hacer?

Aunque esté centrado en el problema específico de la violencia policial contra civiles negros, Black Lives Matter ha servido de poderosa valencia y medio de movilización, además de haber llamado la atención sobre los límites de la Segunda Reconstrucción. Es una respuesta a los múltiples modos en los que la promesa del movimiento por los derechos civiles se vio socavada por el colapso concomitante de la coalición del New Deal⁴⁰, la expansión del neoliberalismo, la desarticulación del Estado del bienestar y la restauración del poder de la clase capitalista por encima de la mano de obra viva, la sociedad, la gobernanza y los recursos planetarios. En sus primeros cien días en el poder, la Administración Biden llevó a cabo avances significativos en el ámbito de la justicia racial. Un proyecto de ley sobre reparaciones identificado como HB40 –y defendido por John Conyers, un congresista de Detroit ya fallecido– salió finalmente aprobado en comité para su plena consideración por el Pleno de la Cámara. Salió igualmente adelante una ley contra los crímenes de odio hacia estadounidenses de origen asiático, tras una serie de incidentes violentos. Por último, el fiscal general Merrick Garland anunció investigaciones completas por parte del Departamento de Justicia de los EE. UU. sobre los departamentos de policía de Louisville y Mineápolis⁴¹. El poder del lema «Black Lives Matter» radica en lo bien que reafirma la injusticia racial como una contradicción central, pero su popularidad entre los poderosos es también una evidencia

Alternatives, Routledge, Nueva York; Vitale, A. (2017), *The End of Policing*, Verso, Londres; Davis, A. (2003), *Are Prisons Obsolete?*, Seven Stories Press, Nueva York; Berger, D., Kaba, M. y Stein, D. (24 de agosto de 2017), «What Abolitionists Do», *Jacobin*; Lancaster, R. (8 de agosto de 2017), «How to End Mass Incarceration», *Jacobin*.

40. En español, «Nuevo Acuerdo», serie de extensas reformas económicas, sociales y políticas promulgadas por Franklin D. Roosevelt entre 1933 y 1938 en respuesta a la Gran Depresión de 1929. [N. del T.]

41. Brenner, K. (26 de abril de 2021), «Justice Dept to Investigate Louisville Police, Garland Says», *New York Times*.

de sus límites a la hora de establecer una oposición genuina al orden social capitalista.

Estas medidas pueden representar un despertar cultural significativo, pero las mismas estrategias de reforma han hecho poco por mejorar las prácticas del uso de la fuerza o por reducir la prevalencia de encuentros mortales entre policías y civiles. George Floyd fue asesinado en una ciudad que había implementado «mejores prácticas», pero eso no impidió que Chauvin, un agente condecorado con diecisiete denuncias civiles en su contra, siguiera en el cuerpo y actuara con total impunidad⁴². Como han dejado claro muchos otros académicos y expertos, reformar las prácticas policiales es necesario y, con suerte, así se reducirán los daños, pero tal reforma tecnocrática no resolverá el problema de fondo.

Este libro sostiene que el liberalismo racial es inadecuado para enfrentar la crisis carcelaria actual y para proteger a los ciudadanos más vulnerables que, a su vez, gestiona el propio poder policial. Esto no quiere decir que las reformas liberales no puedan repercutir en la reducción de daños o en mejorar las relaciones entre la policía y la comunidad, ni que un sistema de justicia penal más humano no sea posible. El conjunto de reformas que ahora forman parte del debate público —como las normas nacionales sobre el uso de la fuerza, las cámaras corporales obligatorias y universales para todas las unidades de policía, la despenalización y reducción del encarcelamiento, el llamado modelo de Camden de vigilancia policial⁴³, las restricciones a la inmunidad calificada para los agentes del orden, entre otras— puede crear un contexto más tolerable para los departamentos de policía y millones de estadounidenses, pero ninguna

42. Lartey, J. y Van Sickle, A. (5 de febrero de 2021), «That Could Have Been Me: The People Derek Chauvin Choked before George Floyd», *MPRNews*; Dewan, S. y Kovelski, S. F. (8 de junio de 2020), «Thousands of Complaints Do Little to Change Police Ways», *New York Times*.

43. En 2013, la ciudad de Camden, en Nueva Jersey, recurrió a la vigilancia masiva —con cámaras urbanas, detectores sonoros de disparos, lectores automáticos de matrículas, torres de observación móvil, etc.— para pacificar a una población que, independientemente de la causa, era la más violenta del país por aquel entonces. [N. del T.]

de estas reformas transformará la función fundamental de la policía bajo el capitalismo tardío.

El 20 de abril de 2021, Derek Chauvin se convirtió en el primer policía blanco de Minnesota en ser condenado por matar a un civil negro. En la memoria reciente, el único otro agente de Mineápolis condenado por un crimen similar es Mohamed Noor, hallado culpable del asesinato en 2017 de Justine Damond, quien había llamado al 911 al sospechar de una agresión sexual en las inmediaciones y fue tiroteada en pijama, desarmada y con su teléfono en mano. Ese caso generó diferentes demandas de justicia racial por parte de activistas locales que pensaban que Noor, uno de los primeros inmigrantes somalíes en servir en el cuerpo de policía de Mineápolis, estaba siendo señalado y tratado con mayor dureza que la usual por haber matado a una mujer blanca⁴⁴. El juicio a Chauvin, sin embargo, dejó poco espacio a la ambigüedad. La brutalidad de sus acciones, la muerte injusta e innecesaria de Floyd y la sensación de que todo podría haberse evitado con un poco más de misericordia y humanidad hicieron de este caso particular el punto álgido del regreso de BLM a la conciencia pública. Multitudes de personas se congregaron en todo el país y las de la Plaza George Floyd de Mineápolis gritaron de júbilo cuando se dictó el veredicto de Chauvin, que lo declaraba culpable de los cargos de asesinato involuntario en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado. Los ojos del ya expolicía de 45 años se movían nerviosos durante la lectura del veredicto y, momentos después, él mismo fue escoltado fuera del tribunal con esposas en sus muñecas. En las horas y días siguientes, comentaristas liberales y usuarios de Internet lo llenaron todo con declaraciones de victoria e, incluso, algunos extrapolaron este caso concreto a una victoria mayor: una en la que la justicia por el asesinato de George Floyd representaba la esperanza incumplida de generaciones de afroestadounidenses.

No obstante, como señalaron activistas más veteranos y radicales en medio de estas celebraciones, la justicia en los tribunales

44. Fadel, L. (14 de junio de 2020), «A Former Minneapolis Police Officer's Case Shows an Example of Selective Justice», *NPR*.

hizo poco por abordar la naturaleza sistémica del problema. Más de cien estadounidenses fueron asesinados por la policía durante las tres semanas que duró el juicio contra Chauvin. En el suroeste de Chicago, dos jóvenes latinos murieron en distintos incidentes relacionados con persecuciones policiales a pie. En la madrugada del 29 de marzo, la policía respondió a unos disparos en el barrio de Little Village con una persecución mortal a Adam Toledo, de 13 años, y Rubén Roman, Jr., de 21, que terminó en un callejón detrás del instituto y academia profesional Farragut. Las grabaciones de las cámaras corporales registraron a Toledo acatando las órdenes de los agentes, arrojando una pistola por el hueco que dejaba una valla cercana y levantando las manos antes de ser tiroteado. Menos de 48 horas después, una persecución similar en el barrio de Portage Park acabó con el asesinato de Anthony Alvarez, de 22 años. Herido de bala por la espalda, en las imágenes de las cámaras corporales de la policía se puede escuchar a Alvarez preguntar «¿por qué me estáis disparando?» justo antes de que pierda el conocimiento. Ambos incidentes provocaron vigiliyas y protestas callejeras e hicieron aumentar las demandas por una suspensión de las persecuciones a pie por parte del Departamento de Policía de Chicago. El 11 de abril de 2021, en el suburbio de Brooklyn Center de Mineápolis, a solo 10 millas –16 kilómetros– del tribunal donde se estaba desarrollando el juicio a Chauvin, el agente de policía Kimberley Potter disparó fatalmente a Daunte Wright, un joven negro de 20 años, durante un control de tráfico. Aunque las grabaciones muestran a Potter gritando «¡táser, táser, táser!» en el momento de su detención, la agente, que tenía una experiencia de 26 años en el cuerpo, disparó su arma reglamentaria en su lugar. Una hora después del veredicto contra Chauvin, la policía de Columbus mató a tiros a Ma'Khia Bryant, una adolescente de 16 años, tras una llamada de emergencia a causa de una pelea enfrente de su casa. Las cámaras corporales registraron la rapidez con la que actuó el oficial Nicholas Reardon, quien disparó a la chica cuatro veces casi inmediatamente después de haber salido del coche patrulla, y los gritos de protesta de la familia de la adolescente y otros testigos mientras ella agonizaba. Al día siguiente, la policía de Elizabeth City, en Carolina del Norte, disparó varias veces contra el maletero

del coche de Andrew Brown, Jr., al intentar huir este de su propia detención. Los agentes encargados mataron al hombre de 42 años, muy querido por su familia. Ese mismo día, en el condado de Spotsylvania, en Virginia, la policía mató a Isaiah Brown, un hombre negro de 32 años, tras haber solicitado ayuda en una disputa doméstica con su hermano. Después de un breve enfrentamiento, la policía disparó diez veces a Brown, quien sostenía un teléfono inalámbrico que la policía, supuestamente, había confundido con un arma.

Cada incidente de uso de la fuerza es diferente y algunos, tristemente, son justificables: muchos de los casos aquí descritos, junto con cientos de otros, terminarán sin que se presenten cargos en contra; otros, con absoluciones; como mucho, ciertas familias recibirán indemnizaciones por parte de los ayuntamientos. El año transcurrido entre la muerte de Floyd y la condena de Chauvin marcó un periodo de aceptación pública sin precedentes de Black Lives Matter, pero la continua prevalencia de tantos casos desgarradores revela las limitaciones de la movilización popular y el liberalismo como medios para abordar la problemática del exceso de la vigilancia policial. En otras palabras, aunque las protestas masivas fueron el resultado de años de trabajo preliminar por parte de los activistas de BLM, también reflejaron las limitaciones de las protestas como una herramienta para crear un nuevo consenso en torno a métodos más progresistas para lograr la seguridad pública. Haría falta mucho más trabajo organizativo que sobrepase los sectores *woke*⁴⁵ de la ciudadanía para crear mayorías legislativas capaces de producir un orden más justo.

Las luchas antipoliciales deben trascender, en última instancia, el liberalismo innato y las políticas étnicas de Black Lives Matter, que son callejones sin salida, además, fácilmente usurpables por la clase inversora y los partidos políticos dominantes. En cambio, deben abordar sin rodeos las contradicciones de la clase capitalista que

45. En español, «despierto», adjetivo derivado del inglés afroestadounidense para referirse a quien tiene conciencia de los prejuicios y discriminación raciales y, más ampliamente, del sexismo, la negación de los derechos LGBTIAQ+ y cualquier desigualdad social. Para la década de 2020, el término ya se utilizaba con sarcasmo para menospreciar los movimientos progresistas como una clase de activismo performativo, superficial y poco honesto. [N. del T.]

impulsan los asesinatos policiales y el aparato carcelario desmesurado de los EE. UU. Este libro sitúa la evolución del poder carcelario en nuestros tiempos dentro de una dinámica más amplia de acumulación de capital y lucha de clases, así como dentro de las formas en las que nuestra economía política actual y el régimen de vigilancia policial fueron puestos en marcha tras la transformación urbana que siguió a la Segunda Guerra Mundial. La presencia desproporcionada de víctimas negras y el hecho de que los movimientos negros hayan amplificado las problemáticas del encarcelamiento masivo y la represión policial no niegan los orígenes capitalistas de tales problemas. Las clases pobres urbanas negras se convirtieron en símbolo de la desigualdad estadounidense durante la Guerra Fría, pero ese simbolismo distorsionó el carácter siempre multirracial del subproletariado. El teatro urbano de la desigualdad y de los abusos policiales ha sido el escenario principal de las protestas de Black Lives Matter debido a esta política simbólica, la geografía y la presencia de infraestructura negra por los derechos civiles. Aun así, los mismos procesos de producción intensiva de capital, contracción industrial, redundancia laboral, criminalización del trabajo y de los delitos de supervivencia y sustitución de la asistencia social por el poder carcelario persisten fuera de los centros metropolitanos de la nación y determinan la vida de los segmentos más vulnerables de la clase trabajadora dondequiera que vivan. Cuando, en lugar de centrarnos únicamente en los daños raciales, definimos el problema de la vigilancia policial contemporánea como uno de gestión de excedentes poblacionales y aseguramiento del régimen de propiedad y de las condiciones previas para la acumulación de capital «postindustrial», se abre un horizonte político diferente, uno que no se enfoca solo en reformas tecnocráticas y el antirracismo, sino también en la reorganización de la sociedad sobre una base más justa y humanista.

Las demandas de desfinanciación y desmantelamiento de los departamentos de policía, que han cobrado impulso en algunas ciudades desde el asesinato de George Floyd, han abierto la puerta a un debate público más provechoso y han suscitado algunas preguntas críticas. ¿Para qué sirve la policía? ¿Necesitamos a la policía para abordar según qué problemas, como la crisis actual de salud mental?

¿Podemos imaginar formas distintas de garantizar la seguridad pública que no impliquen una mayor militarización de la sociedad y una represión de la vida de la clase trabajadora? ¿Podrían utilizarse mejor tanto los recursos públicos que ahora se destinan a los departamentos de policía como las enormes indemnizaciones que se pagan a las familias de las personas asesinadas o mutiladas por la policía? ¿Podrían utilizarse, por ejemplo, en programas sociales progresistas e inversión de comunidades?

Aunque estas demandas han reorientado el debate público hacia la inversión social y han provocado un replanteamiento crítico en torno a la seguridad pública, fallan en dos aspectos cruciales. En primer lugar, al asignar el recorte de presupuestos policiales a la redistribución y al gasto social, estas demandas desperdician demasiado dinero, por así decirlo, en la medida en la que descuidan otros gastos públicos que son igualmente antisociales y demasiado procapitalistas en su orientación. La policía está implicada en las estrategias de desarrollo económico financiadas por los EE. UU. de las que dependen muchas áreas metropolitanas para atraer inversores, creativos empresarios, turistas y futuros residentes ricos. Con todo, estas estrategias también incluyen innumerables formas de subsidios e incentivos corporativos pagados con dinero público que empequeñecen los presupuestos policiales y que, igualmente, deberían examinarse y reorientarse hacia inversiones públicas beneficiosas para el bien común. En segundo lugar, la policía desempeña un papel represivo particular bajo el capitalismo: el de asegurar las condiciones para la acumulación del capital a través del control y la supresión de la clase trabajadora. Sin embargo, el análisis crítico de esta función histórica oscurece con demasiada frecuencia el rol de coerción como un aspecto necesario de la vida política, especialmente en lo que a garantizar la justicia social respecta. Es difícil mantener esta conversación en la era de la provocación por Internet, la «cultura de la cancelación» y el asalto de las redes sociales a la capacidad de atención humana y al debate público con un mínimo sentido. Aun así, una visión histórica más amplia problematiza cualquier demanda simplista de dismantelar los departamentos de policía. En varios momentos de la historia de esta nación, *la coerción estatal fue necesaria para asegurar la justicia*

racial, un hecho que se ha perdido de vista en los tiempos de Black Lives Matter. La ocupación del Sur posbélico por parte del ejército de la Unión del Norte hizo posible el efímero proyecto de una Reconstrucción Federal con un progreso negro sin precedentes. Tras la Segunda Guerra Mundial, el despliegue de alguaciles federales y miembros de la Guardia Nacional en momentos críticos fue indispensable para hacer realidad la garantía de protección igualitaria ante la Constitución y para comenzar el proceso de desmantelamiento de las leyes Jim Crow⁴⁶ y las prácticas racistas del día a día. Los críticos y académicos izquierdistas tienen razón al destacar las acciones represivas de jefes de policía sureños como Bull Connor, las Brigadas Rojas del Departamento de Policía de Chicago y las obsesiones personales del jefe del FBI, J. Edgar Hoover, pero el retrato del papel de la policía en el progreso negro debería ser mucho más amplio. Por último, aunque deberíamos ajustar proporcionalmente a la policía y desmilitarizarla, es bastante ingenuo pensar que una sociedad urbana compleja y populosa pueda existir sin ningún tipo de aplicación de la ley, sobre todo en momentos en los que ciertas fuerzas del orden amenazan la justicia social e, incluso, los derechos democráticos más básicos de los ciudadanos.

Contra los impulsos más milenaristas del discurso abolicionista, este libro aboga por un tipo diferente de abolición, uno que se centra más directamente en los problemas fundamentales de la explotación, desempleo y pauperización de la clase trabajadora, y que es alcanzable en el seno del terreno político concreto de la sociedad estadounidense de principios del siglo XXI. *Debemos abolir las condiciones de clase que la vigilancia policial moderna ha llegado a gestionar.* Ese trabajo puede comenzar con las demandas redistributivas que los activistas de Black Lives Matter defendieron tras el asesinato de George Floyd, pero tales propuestas podrían ir aún más lejos en escalas y aspiraciones sociales. Podríamos lograr una mayor seguridad pública por medios no violentos y prosociales y, al mismo tiempo, mejorar

46. Leyes promulgadas por las legislaturas estatales sureñas de los EE. UU. a finales del siglo XIX que propugnaban la segregación racial en todas sus instalaciones públicas. [N. del T.]

la calidad de vida cotidiana en toda la sociedad –en especial, en las ciudades– mediante obras públicas y la desmercantilización de las necesidades, infraestructuras y servicios básicos. El llamamiento de este libro a «abolir las condiciones» no excluye otros proyectos políticos anticarcelarios en curso, sino que funciona en tándem con otras demandas y luchas que, en conjunto, representan el tipo de mundo que Black Lives Matter y los defensores de la reforma de la justicia penal buscan hacer realidad desde hace décadas: la legalización de las drogas recreativas, la despenalización del trabajo sexual, el tratamiento de la drogadicción y las sobredosis como una crisis de salud pública, la descarceración, el cese de la libertad bajo fianza y la revisión de las políticas sobre el uso de la fuerza en los cuerpos de seguridad del Estado.

Este libro se embarca en un análisis coyuntural del poder carcelario y las luchas antipoliciales con la esperanza de esclarecer cómo funciona la policía en el capitalismo tardío y generar ideas políticas que puedan estimular cierto debate y acercarnos a una sociedad más justa. Los capítulos que siguen atraviesan distintos modos de análisis y pasan de la interpretación histórica a la crítica política y cultural, a la teoría especulativa. Los dos primeros capítulos ofrecen una interpretación histórica alternativa del surgimiento de nuestro actual modo de vigilancia policial, que no tiene sus raíces en las patrullas esclavistas del periodo anterior a la Guerra Civil –ni siquiera en la criminalización de los inmigrantes negros que urbanizaban las ciudades durante las eras progresistas–, sino en la expansión postbélica de la sociedad de consumo y en la espectacular transformación espacial y económica de las ciudades estadounidenses. Estos procesos dieron lugar a la idílica clase media suburbana y a la «subclase» urbana: ambas son nociones ideológicas conservadoras que socavaron la conciencia de la clase trabajadora y, en última instancia, impulsaron y justificaron el crecimiento del aparato carcelario. Los capítulos 3 y 4 pasan de esta interpretación histórica inicial de los orígenes de la vigilancia policial contemporánea a un análisis crítico de la primera ola de Black Lives Matter y las formas en las que BLM revisa la política racial negra, incluso cuando repite sus propias limitaciones políticas. Una crítica fundamental que se desarrolla aquí es que la política antirracista

liberal es, en sí misma, una política de clase que surge de un estrato profesional-gerencial negro preocupado con razón, pero orientado igualmente en gran medida a hacer funcionar la economía de mercado sin discernir a los verdaderos ganadores y perdedores del giro neoliberal dentro y fuera de la población afroestadounidense. Por último, los capítulos 5 y 6 se adentran directamente en los debates sobre la desfinanciación y desmantelamiento de los departamentos de policía para desarrollar una posición anticapitalista que amplía la visión pro-trabajo y pro-bienes públicos de la política izquierdista que defiende este libro. El retorno de verdaderas obras públicas y la desmercantilización de las necesidades básicas podrían iniciar el proceso de consecución de la seguridad pública mediante una garantía universal de seguridad económica.